

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Ref. 2019 00323 00

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición en subsidio apelación** formulado por la parte demandante contra el auto de fecha 2 de noviembre de 2021, mediante el cual se resolvió el incidente respecto de las objeciones formuladas a las cuentas rendidas por la demandada

II. ANTECEDENTES

1. La parte recurrente manifestó como primera medida que la demandada no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de 24 de agosto de la presente anualidad, en el cual se le requirió para que presentara la rendición de cuentas a través de apoderado judicial.

Frente a los gastos que fueron tenidos en cuenta a favor de la convocada señaló que en la parte considerativa de la providencia reprochada se observa una gran contradicción, concretamente, en el numeral 2.2., toda vez que de una parte se indicó que éstos no fueron debidamente acreditados, sin embargo, a su vez en el numeral 3° se encuentran liquidados muchos de aquellos gastos, entre ellos, los relacionados con mercado de pañales, medicina no POS, aseo, onces y peluquería, siendo inviable que, transcurridos casi 6 años, estos conceptos se puedan entender gastos, que sufragaron el cuidado personal y manutención de los señores MARIA DIVA y SILVINO tan es así que, el recibo de caja menor del 25 de febrero de 2015 por valor \$40.000 no puede tenerse como arreglo de pies y manos de alguno de los anteriores.

Así mismo, adujo que no se puede tener en cuenta los gastos por concepto de medicamentos, exámenes, arreglo de pies y manos, alimentación u onces puesto que corresponden a rubros que fueron costeados por la señora María Diva, y que lamentablemente, bajo la presunción de la buena fe se dejó a cargo de la demandada toda la información y documentos que posteriormente fueron

arrimados por la señora Daphne Johanna Niño Guerra, aunado al hecho que, los medicamentos eran entregados por la EPS CAFESALUD.

En lo que tiene que ver con el concepto de impermeabilización de la fachada de la casa por valor de \$9.669.950 indicó que igualmente fue costeado en su totalidad por la actora sólo que en razón a la profesión y conocimiento que tiene la demandada sobre el tema encargándosele sólo las gestiones de contratación del personal.

Finalmente adujo que no resulta clara la razón por la cual el despacho tiene en cuenta y liquida mes a mes la suma de \$1.000.000 por concepto de administración cuando en el escrito de rendición de cuentas la convocada manifiesta que en ningún momento recibió ninguna contraprestación económica por administrar, amen que nada se dijo respecto de los dineros que ingresaron desde agosto de 2015 hasta la actualidad, de ahí que, se adeude el monto de \$8.988.810

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición al extremo actor.

3. El extremo demandado se opuso a la prosperidad del medio de defensa incoado argumentando que dio cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de fecha 24 de agosto de 2021.

Señaló que contrario a lo expuesto en el recurso no fueron tenidos en cuenta la totalidad de los gastos algunos porque no fueron considerados y otros porque con el paso del tiempo ya fueron imposibles de acreditar mediante facturas y soportes, el señor Silvino Niño Hernández vivía en un hogar geriátrico necesitaba cuidado especial de arreglo de pies y manos tratándose de gastos que no eran pagados por ninguna E.P.S., pues en muchas ocasiones necesitó medicamentos que no se encuentran cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud, sin que fueran gastos asumidos por la demandante, amen que al obligar a la pasiva a rendir cuentas se debe tener en cuenta una retribución por la administración.

III. CONSIDERACIONES

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. El proceso de rendición de cuentas está consagrado en el artículo 379 del Código General del Proceso que tiene como fin, de un lado, establecer si el demandado se encuentra obligado a rendir cuentas y, de ser el caso que se ordene rendirlas si voluntariamente no ha procedido a hacerlo.

Una vez el demandado rinde las cuentas, se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie al respecto y formule objeciones, las cuales se tramitan como incidente fijándose el monto que deberá cancelar el demandado y se ordena su pago. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-981 de 2002 expresó:

“El proceso de rendición de cuentas, es un proceso civil especial “de conocimiento”, denominado así porque en este tipo de procesos previamente se impone al juez el conocimiento de los hechos y de las pruebas, para después adoptar la declaración correspondiente.

Se adelanta bajo el trámite de un proceso abreviado, y persigue dos fines claramente determinados: a) Inmediato: constituido por las cuentas, esto es, los ingresos y egresos, con sus respectivos soportes, de la actividad desarrollada por quien se ha encargado de administrar bienes o negocios de otra persona (...), b) Mediato: consiste en establecer quién debe a quién y cuánto, o sea, cuál es el saldo que queda a favor de una parte y a cargo de otra, llámese demandante o demandado.

(...)

El objeto de este proceso, es que todo aquel que conforme a la ley, esté obligado a rendir cuentas de su administración lo haga, si voluntariamente no ha procedido a hacerlo.”

5. Conforme a las anteriores precisiones de orden legal y jurisprudencial descendiendo al caso puesto a consideración del despacho, se advierte que mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 2020 se ordenó a la demandada rendir cuentas a María Diva Guerra de Niño correspondiente al tiempo que duró su gestión como administradora del predio ubicado en la Calle 120 No. 7 -88 de esta ciudad, concretamente, en el periodo-diciembre de 2014 a julio de 2015.

En cumplimiento de la orden impartida dentro de la oportunidad procesal correspondiente la demandada presentó la rendición de cuentas, a la cual se corrió traslado en los términos del artículo 379 del estatuto procesal, siendo así, la parte actora formuló objeciones que fueron resultas mediante auto adiado 2 de noviembre de la presente anualidad.

De lo expuesto, revisadas las actuaciones surtidas, se advierte la improsperidad del recurso formulado por cuanto se observa que la determinación objeto de censura se encuentra ajustada a derecho.

En efecto, como primera medida se advierte que el apoderado judicial de la parte demandada si dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de fecha 24 de agosto de 2021 en punto de la acreditación del derecho de postulación, pues a través de correo electrónico presentó el escrito de rendición de cuentas en nombre de la demandada Daphne Johanna Niño Guerra, sin que fuese necesario correr nuevamente el traslado, toda vez que, dicho documento fue puesto en conocimiento de la parte actora mediante proveído de fecha 10 de marzo del año en curso, quien en el término legal establecido presentó oposición.

Ahora bien, revisado el informativo se observa que de las cuentas rendidas la demandante formuló objeciones de forma parcial centrando su inconformidad sólo en algunos de los conceptos que fueron relacionados como gastos, tales como: compra de productos para el cuidado del señor Silvino Niño Guerra, pago de la EPS, pagos por el servicio de odontología, servicios prestados por médicos privados, impuesto predial y servicios públicos domiciliarios.

En ese sentido, para resolver el asunto puesto a consideración se realizó un análisis detallado del material probatorio obrante en el plenario, en particular, los diferentes recibos de caja menor y facturas aportadas al trámite que dan cuenta de los gastos asumidos para el cuidado del señor Silvino Niño como medicamentos, exámenes, arreglo de pies y manos, alimentación, entre otros, luego de lo cual se logró constatar que varios de estos egresos, habían sido asumidos por la demandante o no se tenía certeza de su periodo de causación y la persona que los canceló, por tanto, se excluyeron de liquidación final, sin embargo, la parte actora no logró demostrar que hubiese costeadado la totalidad de dichos rubros pues si bien manifestó que dejó la documentación a cargo de la señora Daphne Johanna Niño Guerra y posteriormente fue aportada por ésta para soportar los gastos, lo cierto es que, no aportó elemento de convicción alguno para acreditar dicha circunstancia.

Bajo esta perspectiva, de acuerdo a la carga de la prueba plasmada el artículo 167 del Código General del Proceso según el cual *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, correspondía a la parte objetante demostrar la conducta temeraria de la demandada al allegar documentos para acreditar pagos que, según su dicho, no fueron cancelados por ésta o realizar manifestaciones que no se ajustaban a la realidad, de otro modo supondría la transgresión del principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política que se presume concurre en todas las actuaciones administrativas o judiciales y que debe ser desvirtuado a través de los mecanismos de convicción establecidos por el legislador.

Sobre este tópico el máximo tribunal en materia constitucional precisó:

*“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero **dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.**”¹(énfasis fuera de texto)*

De otro lado, tal y como se mencionó en el auto de fecha 2 de noviembre de la presente anualidad trayendo a colación un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,² la competencia del juez en asuntos de esta naturaleza se debe limitar únicamente a los aspectos que son materia de objeción de modo que si el demandante guarda silencio respecto alguno o algunos de los conceptos de la rendición de cuentas se entienden tácitamente aceptados.

Así las cosas, en lo que tiene que ver con la suma de \$9.669.950 correspondiente a la impermeabilización de la casa y el valor de \$1.000.000 por concepto de administración que se relacionó como egreso mensual en el periodo que se ordenó rendir cuentas, se evidencia que no fueron objetados en su oportunidad por parte del apoderado judicial de la actora, motivo por el que, se entendieron tácitamente aceptados y fueron incluidos por la totalidad de los montos denunciados al momento de realizar la liquidación correspondiente, sin que sea dable ahora resolver las inconformidades planteadas dado que no es el recurso de reposición el escenario para exponer nuevos argumentos o aportar pruebas cuando en el estadio procesal dispuesto se omitió hacerlo.

Finalmente, como quiera que en la sentencia mediante la cual se ordenó a la demandada rendir cuentas de su gestión como administradora del citado bien se estableció de forma precisa el término respecto del cual se debía presentar el informe, esto es, diciembre de 2014 a julio de 2015, tampoco es posible realizar pronunciamiento alguno de cara a los ingresos que se han generado del inmueble con posterioridad a dicha data, lo que impone, mantener incólume la decisión reprochada.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 4 de febrero de 1971, M.P. German Giraldo Zuluaga, Gaceta Judicial Nos. 2340 a 2345.

V. RESUELVE

PRIMERO: MANTENER INCÓLUME el auto de fecha 2 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 321 del Código General del Proceso **conceder** ante el Juez Civil del Circuito de Bogotá en el efecto devolutivo el recurso de apelación formulado en contra del auto de 2 de noviembre de 2021.

Por Secretaría remítase copia del expediente a la Oficina Judicial de Reparto.

Notifiquese,³

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

³ Esta providencia se notificó por estado No. 141 de 8 de diciembre de 2021.

Código de verificación: **7549b5df2c74b28182e532c3c1bda588ab28ba550eeb036e9d96049e0a5e645c**

Documento generado en 07/12/2021 12:07:52 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>